



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

—SALA IV—

Causa Nº 30050/2023/1/CA2 CATTORINI HUGO HECTOR C/EN –AFIP-DGI S/
PROCESO DE CONOCIMIENTO

Buenos Aires, diciembre de 2024.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1º) Que, el representante legal del Sr. Hugo Héctor Cattorini promovió demanda contra la Administración Federal de Ingresos Públicos, a fin de que se dejara sin efecto el acto administrativo dictado el 28/6/22, por el que se rechazó el pedido de compensación peticionado por la Sra. Renata Cattorini en su representación.

Solicitó, a la vez, la concesión de **una medida cautelar de no innovar** con el objeto de que se ordenase al Fisco que se abstuviera de: a) emitir boleta de deuda, intimar judicialmente, ejecutar, exigir, caucionar, embargar, solicitar o trabar inscripciones o inhibiciones generales o particulares de disposición de bienes, o de cualquier otro acto o medida de similares características o finalidades, sea en sede administrativa o judicial relacionadas al cobro del Impuesto Celular — Renta Financiera del período fiscal 2021, como así también sus intereses; b) inhabilitar, bloquear, rechazar o impedir la emisión del Certificado de Cumplimiento Fiscal o instrumentos similares sobre la base de deudas referidas al mencionado impuesto, como así también de incorporar y/o informar deudas en sus servicios web por el referido concepto.

2º) Que, el 11/9/2024, la Sra. jueza **hizo lugar** a la tutela requerida, **previa caución real de \$750.000.**

Para así resolver, consideró que, dado que en el caso el Fisco había denegado a la responsable sustituta del Sr. Cattorini la posibilidad de compensar el saldo a favor del contribuyente con el de la declaración jurada 2021 correspondiente al mismo impuesto y con el monto a ingresar por Impuesto Cedular por el mero hecho de que no era posible realizar compensaciones entre CUITs diferentes, y sin cuestionar la existencia del saldo a favor que invocaba, la pretensión se sustentaba en un derecho verosímil, de conformidad con el criterio jurisprudencial adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación *in re*, “Rectificaciones Rivadavia”, del 12 de julio de 2011, y de las distintas Salas de esta Cámara.

En consecuencia, ponderando que las medidas precautorias no exigían de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, estimó pertinente hacer lugar a la tutela bajo análisis, y por consiguiente, ordenó a la AFIP que se abstuviera de: 1) emitir boleta de deuda, intimar judicialmente, ejecutar, exigir, caucionar, embargar, solicitar o trabar inscripciones o inhibiciones generales o particulares de disposición de bienes, o de cualquier otro acto o medida de similares características o finalidades, sea en sede administrativa o judicial, relacionadas al cobro del Impuesto Celular –Renta Financiera del período fiscal 2021-,



como así también intereses por hasta un monto de \$3.055.402,44; 2) inhabilitar, bloquear, rechazar o impedir la emisión del Certificado de Cumplimiento Fiscal o instrumentos similares sobre la base de deudas referidas al mencionado impuesto, como así también de incorporar y/o informar deudas en sus servicios web, todo ello por el término de tres meses.

3º) Que, contra dicha sentencia, **el Fisco apeló y expresó agravios** el 24/9/2024, que contestó la actora el 8/10/2024.

Sostiene que la magistrada ignoró completamente el cambio normativo, de conformidad con lo previsto en la RG 3175, según el cual quienes revisten la calidad de responsables sustitutos, como el caso de la Sra. Cattorini, no pueden utilizar el instituto de la compensación.

Afirma que en los presentes autos no se ha planteado ninguna discusión en torno a la calidad de sujeto en los términos del art. 6º de la ley 11.683, ni tampoco resulta relevante si el saldo que pretende compensar le pertenece por derecho propio o no, dado que existe una norma vigente que le prohíbe claramente realizar dicha transacción.

En tal sentido, manifiesta que el contribuyente no puede utilizar la compensación para cancelar las obligaciones cuya intimación pretende suspender y dicha circunstancia en nada se relaciona con el hecho de si dicho crédito se considera propio o ajeno, sino simplemente porque la normativa se lo ha vedado.

Esgrime que el establecimiento de los mecanismos de recaudación y percepción de los impuestos constituye una materia discrecional reservada para el legislador y la propia Administración Federal, en virtud de las facultades delegadas en los arts. 23 y 24 de la ley 11.683, según las cuales lo habilitan a determinar los mecanismos de percepción que mejor se adecuen a una mayor celeridad y eficacia en su rol de administración tributaria.

Arguye que de la lectura del último párrafo de la norma se evidencia que se está colocando en cabeza de su parte la potestad para establecer la posibilidad de que los sujetos comprendidos en el art. 6º de la ley 11.683 puedan ejercer la facultad de compensar.

Sostiene que el art. 28 establece que dicha facultad podrá ejercerse con respecto a esos sujetos conforme los requisitos y condiciones que establezca el Fisco, de lo cual se deduce que la compensación no procede de puro derecho, sino que se requiere de la habilitación expresa del ente fiscal.

En consecuencia, estima que no caben dudas que la “verosimilitud en el derecho” no ha sido debidamente analizada por la magistrada, quien se limitó a estimar atenuado el requisito, pero no consideró por qué se encontraría satisfecho.

En el presente, en ningún momento se analizó o indicó que se hubiera acreditado que la contraria no pudiera hacer frente al pago de la intimación en pugna, o que ella le generase algún perjuicio concreto. De hecho, el rechazo se dispuso el 28/6/22,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

—SALA IV—

Causa Nº 30050/2023/1/CA2 CATTORINI HUGO HECTOR C/EN –AFIP-DGI S/
PROCESO DE CONOCIMIENTO

es decir más de dos años después. Sin embargo, no hay ninguna ejecución fiscal en trámite, lo que da cuenta que no existe ningún peligro inminente, sin perjuicio de que tampoco está demostrado que el Sr. Cattorini no pueda dar cumplimiento a la regla del *solve et repete*.

Manifiesta que el daño será irreparable en tanto ya vieron lesionadas las arcas públicas con las que contaba para llevar adelante sus objetivos, muchos de los cuales resultan impostergables en razón de las importantes funciones sociales y asistenciales que lleva adelante la Administración.

4º) Que, conforme surge de los presentes autos, y de la documentación acompañada por el actor a fs. 4/118, y no desconocida por el Fisco, el Sr. Cattorini en su calidad de contribuyente, abonó el primer anticipo de Bienes Personales el 25 de agosto de 2021 por un monto de **\$3.055.402,44**. Luego, obtuvo la baja como residente en el país con motivo de haber obtenido su residencia permanente en Uruguay, desde el 1º de diciembre de 2021.

A partir de ello se designó como responsable por deuda ajena a su hija Renata, quien presentó la declaración jurada anual de Bienes Personales el 24 de junio de 2022 del Sr. Cattorini con un saldo a pagar de **\$491.590,15**. Dicho monto se compensó parcialmente con el del anticipo abonado el 25 de agosto de 2021, quedando un saldo a favor de **\$2.563.812,29**, que compensó con el Impuesto Cedular adeudado por el actor de **\$18.995.316,18**, ingresando la suma de **\$16.431.503,89**.

El 27/6/2022 solicitó por medio de su hija que se reconociera dicha compensación y al día siguiente la AFIP rechazó el pedido por no haber coincidencia en los CUITs.

El 28/6/2022 se lo intimó a abonar la suma de **\$2.563.812,29**, en concepto de saldo del Impuesto Cedular.

El 2/8/2022 inició un amparo que fue desestimado por no ser la vía, lo que fue confirmado por este Tribunal el 12/7/23, en cuya oportunidad se dejó sentado que el plazo previsto en el art. 25 de la ley 19.549 para deducir una acción ordinaria a los fines de cuestionar los actos involucrados se iniciaría con la notificación de la sentencia.

5º) Que, ante todo, cabe señalar que en el caso lo que el actor intenta compensar se refiere a deudas y créditos propios, más allá de que la solicitud de compensación la haya efectuado su hija “en su representación”. Tampoco puede soslayarse que el propio Fisco sostuvo que la cuestión no se relaciona con el hecho de que el crédito sea considerado propio o ajeno al actor, sino simplemente porque la normativa se lo ha vedado.



6º) Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte federal en el precedente “Rectificaciones Rivadavia” (Fallos: 334:875), *“el análisis del tributo pagado en exceso por un contribuyente sigue siendo parte de su derecho de propiedad y, por ende, éste puede disponer de él para la cancelación de otras obligaciones tributarias o para su transferencia a terceros. Todo ello sujeto a una razonable reglamentación (art. 14 y 28 de la Constitución Nacional) que, en el caso, está dada por los arts. 27, 28, 29 y ccdtes. de la ley 11.683”* (Fallos: 304: 1833 y 1848; 305:287; 308:1950; 312:12349 y 324:1848).”

Así, en dicha ocasión, ese Tribunal entendió que correspondía confirmar la sentencia que había hecho lugar a la extinción por compensación del Impuesto sobre los Bienes Personales Sociedades y Participaciones mediante la utilización de saldos de libre disponibilidad generados en el Impuesto al Valor Agregado si se verificaba identidad entre los sujetos tributarios, esto es que el titular pasivo de la deuda impuesta sea simultáneamente el titular activo de un crédito contra el Fisco, *sin que resulte relevante que en un caso lo sea como responsable y en el otro como contribuyente.*

Es decir, en concreto, admitió la posibilidad de que la sociedad como responsable sustituto del pago del Impuesto sobre los Bienes Personales Sociedades y Participaciones *compense* dicho saldo deudor con el saldo acreedor resultante de otros impuestos.

7º) Que, ahora bien, en atención a las conclusiones que sostuvo la Corte en el referido precedente de *Fallos*: 334:875, la AFIP precisó el alcance del instituto de la compensación previsto por la resolución general 1658/2004 disponiendo mediante la resolución general 3175/2011 que *“los responsables por el cumplimiento de deuda ajena y los responsables sustitutos a que se refiere el art. 6º de la ley 11.683 no podrán solicitar la compensación a que alude la presente”* (art. 1º, énfasis añadido).

Al respecto, cabe señalar que, en ocasión de dictar pronunciamiento en la causa n° 10.297/2020 “Halliburton Argentina SRL c/EN – AFIP-DGI”, sentencia del 27/10/20, esta Sala examinó la jurisprudencia que reconoce la posibilidad de los responsables sustitutos de compensar las deudas asumidas en tal calidad con créditos fiscales a su favor (cfr. **Sala I**, *in re* “Cresud Comercial c/ AFIP”, sent. del 08/04/19; **Sala II**, *in re* “Cresud Comercial c / AFIP”, sent. del 16/04/19; **Sala III**, *in re* “Cresud Comercial c/ EN AFIP”, sent. del 04/10/18 y “Avenida Compras SA c/ AFIP s/ medida cautelar”, sent. del 08/08/20; y la **Sala V**, en las causas “Irsa Inversiones y Representaciones SA c/ AFIP”, sent. del 12/05/16 e “Irsa Inversiones y Representaciones SA c/ AFIP”, sent. del 02/02/18), y consideró configurada la verosimilitud en el derecho en análogos términos a los aquí invocados. Ello así, por razones de brevedad y a fin de evitar repeticiones innecesarias, corresponde remitir a los fundamentos expuestos en el precedente *supra* referenciado.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

—SALA IV—

Causa Nº 30050/2023/1/CA2 CATTORINI HUGO HECTOR C/EN –AFIP-DGI S/
PROCESO DE CONOCIMIENTO

Se hace saber a los letrados que el texto de las sentencias citadas puede ser consultado en la página de internet www.cij.gov.ar/sentencias.html. o requerido a través del correo electrónico del Tribunal (cncontadmfed.sala4@pjn.gov.ar).

8º) Que, en lo atinente al **peligro en la demora**, en el caso, el rechazo de la compensación intentada a través del sistema de cuentas tributarias trajo aparejado el registro de una deuda impaga en concepto de Impuesto Cedular, con el consecuente perjuicio para el actor y la posibilidad de que la AFIP inicie un juicio de ejecución a fin de perseguir su cobro o realizar medidas preventivas o ejecutivas sobre su patrimonio. Ello así, en caso de proceder la ejecución, la obligación consecuente repercutiría directamente sobre su patrimonio, lo que redundaría en los hechos en la frustración de la compensación requerida, que devendría abstracta.

Así pues, no deben soslayarse las diversas consecuencias que podría generar la ejecución de la pretensión fiscal cuestionada y los graves efectos patrimoniales que podría traer aparejado (conf. Fallos: 247:181; 288:287; 314:1312 y 324:871). Ello, en tanto el peligro en la demora exige que la tutela jurídica que, eventualmente, el actor obtenga mediante el pronunciamiento de fondo no pueda en los hechos realizarse; lo cual implica que, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo resulten prácticamente inoperantes u ocasionen un daño de imposible o de muy dificultosa reparación ulterior.

Lo antedicho resulta suficiente para tener por configurado este recaudo, en tanto los presupuestos procesales de las medidas cautelares se hallan de tal modo relacionados que, a mayor peligro en la demora puede atemperarse el rigor acerca del *fumus boni iuris* y viceversa, siempre, claro está, de que ambos recaudos se hallen presentes (conf. esta Sala, en la causa 67250/2017/CA1 “Tosoni”, resol. del 17/04/18).

9º) Que, por lo demás, las consecuencias del dictado de la medida pretendida no se presentan como constitutivas de una **afectación del interés público** (conf. art. 13, inc. 1º, punto d, de la ley 26.854), dado que el monto de la compensación denegada ya se encuentra en poder del organismo recaudador por cuanto fue ingresado por el actor en concepto de anticipo de Bienes Personales, cuyo saldo a favor no se encuentra controvertido en autos (en análogo sentido, esta Sala, causa 88560/2018, “Inc. apelación de Carrier SRL”; Sala I, causa 63864/2018, “Visuar S.A. c/ EN – AFIP s/ medida cautelar (Autónoma)”, resol. del 14/05/19).

10) Que, la medida no causa **efectos jurídicos o materiales irreversibles**, ya que, la demandada podrá reclamar el importe adeudado, cuyo cumplimiento se aseguró mediante la caución correspondiente.



11) Que, finalmente, cabe destacar que en la **causa 42861/2022 “Incidente N° 1 “Cattorini, Hugo Héctor c/AFIP –Planilla Gral 50000742434 N° 39”** del 13/12/22, este Tribunal había desestimado la cautelar solicitada por el actor habida cuenta de que parte de la documentación relevante a fin de dirimir la cuestión había sido presentada recién *con posterioridad* al dictado de la precautoria, por lo que no pudo ser evaluada oportunamente por el juez. Ello así, sin perjuicio de la posibilidad del actor de solicitar a tales efectos una nueva cautelar, tal como aconteció en los presentes autos, en donde, a diferencia de aquella causa, de la documental oportunamente presentada se advierte la verosimilitud del derecho a la luz de la jurisprudencia antes referenciada.

Por todo lo expuesto corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada, con costas por su orden en atención a la naturaleza de la cuestión (art. 68, segunda parte del CPCCN). **ASI SE RESUELVE.**

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN

ROGELIO W. VINCENTI

